

LA DEMOCRACIA VENEZOLANA DESDE 1989

De la explosión a la descentralización

Luis Salamanca

Luis Salamanca: Politólogo venezolano, miembro investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, UCV, Caracas.

Palabras clave: sistema político, Estado, ajuste, Venezuela.

La democracia venezolana cumplirá cuarenta años de existencia ininterrumpida el 23 de enero de 1998. Conformará, junto con Costa Rica, Colombia y México, una de las más antiguas democracias del continente latinoamericano¹. Constituye este período el más largo en nuestro país, en materia de experimentación con un tipo de sistema político en toda su historia independiente. Supera en longevidad no sólo al régimen castro-gomecista (36 años) sino también al sistema político oligárquico de Páez y Monagas (29 años) y la dominación guzmancista (14 años). Sin embargo, en los últimos ocho años (1989-1997) la democracia venezolana ha sufrido una serie de embates políticos, sociales y económicos, que han hecho dudar de su antigua resistencia y de sus posibilidades de continuidad en el futuro.

El amalgamamiento de problemas políticos, institucionales, económicos, sociales y éticos, se levantan frente al sistema democrático con todo su potencial de amenazas. El distanciamiento de la ciudadanía respecto de los partidos y el rechazo, (cuando no el desprecio) a la actividad política; la ruptura del consenso entre civiles y militares a raíz de las asonadas militares de 1992; el virtual colapso de la capacidad de respuesta institucional del Estado, verdadera «extinción» del Estado del ámbito de la vida cotidiana; la ausencia de un modelo económico estable y productivo, una vez patentizada la crisis del modelo rentista-distributivo; el empobrecimiento masivo de la población y la corrupción galopante, no sólo en el Estado sino en importantes franjas de la

¹ Estos cuatro países constituyen, hoy en día, el grupo con democracias de más larga duración del continente. Sin embargo, se impone un comentario: la democracia colombiana reinauguración en 1958 hasta 1974, fue manejada con criterios restrictivos en el marco del pacto bipartidista conocido como Frente Nacional, lo que limitó la competencia partidista, criterio político fundamental de una democracia operante. La «democracia» mexicana ha sido constantemente cuestionada, dada la ausencia de posibilidades para una lucha competitiva por el poder. Costa Rica, por el contrario desde 1949, es considerada como una democracia constitucional, representativa y liberal y genuinamente competitiva.

sociedad, constituyen poderosas fuerzas anudadas al interior de la sociedad venezolana y de su sistema político democrático.

Si bien el año 1989 marca el inicio de la fase de activación conjunta de esta maquinaria de crisis, su ensamblaje puede rastrearse hacia finales de los 70, cuando la llamada *Venezuela saudita* –la del auge petrolero y el consumo sin precedentes de los venezolanos– comenzó a desinflarse y a desaparecer con la liquidación del subsidio estatal más importante de la historia contemporánea: el subsidio a la moneda. Efectivamente, el 18 de febrero de 1983 (que pasaría a la historia como el *Viernes negro*) Venezuela soltó las amarras sociales y económicas que habían mantenido conjugado experiencia democrática y modernización, con una abrupta maxi devaluación del bolívar. Desde entonces comenzaron a erosionarse las bases económicas y culturales del ensayo moderno y democrático venezolanos. Para las elites dirigentes ello demandaba una revisión del modelo de desarrollo, en orden a buscar un nuevo formato de modernización, tarea que fue pospuesta –como decimos los venezolanos– «corriendo la arruga» histórica.

La dinámica de los últimos 15 años ha logrado debilitar y desfigurar la maquinaria socio-institucional montada sobre los cuatro pilares de nuestra modernidad. Por décadas, el petróleo, el Estado y los partidos constituyeron la ecuación modernizadora de la Venezuela contemporánea (1928-1989); tres de las cuatro patas de la mesa del cambio. Si bien no siempre funcionaron al unísono, por cuanto la dictadura «borró», a los partidos de la ecuación modernizadora, han sido, sin duda, los rieles por los cuales comenzó a movilizarse en forma acelerada la sociedad –la cuarta pata– desde su lentitud y escaso crecimiento agrario. En esta combinatoria, el petróleo aportó los recursos; el Estado los invirtió; los partidos aportaron el pueblo y éste aportó los votos.

Desde 1983, petróleo, Estado, partidos y pueblo han venido dejando de funcionar en la forma relativamente engranada del pasado. La filosofía que lubricaba esta maquinaria –el paradigma rentista petrolero– ha perdido razonabilidad social e ideológica y la modernización alcanzada se ha detenido y erosionado. El petróleo, el Estado y los partidos, han dejado de funcionar con los carriles por los cuales transitaba con relativa fluidez la sociedad venezolana, justificada por el paradigma rentista. Como consecuencia, el tren de la modernización descarriló y pasajeros y conductores son víctimas de un gigantesco accidente histórico. El paradigma rentista sufre de congoja ante la pérdida irreparable de su sustento. La situación actual es de una transición dolorosa, confusa y lenta, en la cual pasajeros y conductores del viejo tren de la modernización descarrilada, tratan de restañar las heridas y, sobre todo, evitar su desaparición.

Estos elementos funcionaron por más de cuatro décadas dando lugar a un acuerdo sociopolítico para lograr el crecimiento. De una sociedad sin ascenso

económico y una economía rural transitamos a otra estatal, parcialmente industrial y con alto contenido terciario, con altas tasas de crecimiento; de una población iletrada evolucionamos a otra con más altos coeficientes de educación formal; de una población concentrada en el campo pasamos a otra concentrada en la ciudad; de una sociedad incomunicada geográficamente y culturalmente pasamos a otra con un mayor nivel de comunicación territorial y cultural y finalmente, de una sociedad sin voz política, sin ciudadanía, pasamos a una sociedad con voz e identidad políticas. Todos estos factores estimularon la aproximación creciente a un modelo más democrático, tanto política como socialmente.

La revisión del ensayo moderno venezolano comenzó en forma inesperada y abrupta en febrero de 1989, con la llegada al gobierno, por segunda vez, de Carlos Andrés Pérez, otrora artífice de la *Venezuela* saudita (1973-1983) y cuya campaña electoral alimentó las esperanzas colectivas de una vuelta a la edad dorada. Sin embargo, el antiguo populista abrió un camino inédito: comenzó una profunda revisión y desmontaje del modelo socioeconómico y político-institucional con el que se había funcionado en las décadas precedentes. A partir de entonces se puede hablar de una nueva etapa en la historia del país, animada por cambios rápidos en la economía y en las reglas de juego socioeconómico tradicionales junto con violentas formas de respuesta. tanto de las elites como de las masas.

A partir de 1989 Venezuela se convirtió en una sociedad de protesta y rebeldía. Para tener una idea de ello baste decir que mientras entre 1958 y 1979, en los primeros 21 años de democracia, se produjeron cerca de 2 500 eventos de protesta social², entre 1989 y 1996, en apenas 7 años, se han producido 4.768 hechos de protesta³, con algunas explosiones sociales como la del 27 de febrero de 1989, conocida como el Caracazo.

Sin necesidad de hablar de causalidades estrictas, es inocultable la sincronía entre el cambio del modelo socioeconómico con su consecuente cambio de las reglas del juego social y del código cultural que habían regido las relaciones entre el Estado y la sociedad venezolana. De una sociedad protegida por el Estado bajo la forma de subsidios, se comenzó a transitar hacia una sociedad desprotegida y abandonada a sus propias capacidades de sobrevivencia, que debía empezar a «pagar la cuenta completa» de su consumo social. Se iniciaba una historia de servicios públicos más caros, aunque no necesariamente más eficientes, y de una población que no había sufrido la enfermedad de la inflación, pasamos a ser una sociedad inflacionaria.

Y ello estimuló diversos tipos de respuestas políticas. La primera, la explosión social del Caracazo, que dejara casi 300 muertos, según cifras oficiales,

² Según investigación que llevamos a cabo en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela acerca del papel de la protesta en la vida política.

³ Cifras del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea).

aunque fuentes internacionales señalan más de 1.000. El Caracazo fue un estallido hostil y espontáneo de una población sometida a la pérdida de su nivel de vida «saudita», que se propagó desde Guarenas, ciudad-dormitorio. hacia Caracas y desde allí a otras ciudades del país. Desde entonces, las dinámicas de descomposición social se han acentuado y el consenso social del pueblo con los partidos y la democracia se ha debilitado, especialmente, en los sectores más depauperados. Es por ello la explosión social de mayor envergadura de las ocurridas en América Latina a partir de las políticas de ajustes económicos estructurales.

La segunda respuesta al proceso de desmontaje del ensayo moderno venezolano, fue la rebelión militar de 1992. Una doble rebelión militar –el 4 de febrero y 27 de noviembre– rompió el consenso entre militares y políticos, la aquiescencia de los primeros a los civiles, la no beligerancia e intervención militar directa en política. Buena parte de la oficialidad media provocó la ruptura del llamado «encaje» institucional de los militares. De fuerza institucional pasaron a fuerza política, actualizando una vieja tradición venezolana.

Y la tercera respuesta ha sido de tipo político, encarnada en el ciudadano común, que ha venido apartándose de la vida política a través de la abstención electoral, quebrando una tendencia de alto involucramiento electoral en las primeras décadas democráticas. La nueva actitud política del venezolano comenzaría a vislumbrarse en diciembre de 1989 –cuando por primera vez se eligieron en forma directa los gobiernos estatales y se creó la figura de los alcaldes– y se convertiría en un fenómeno nacional en las elecciones presidenciales de 1993, cuando la abstención pasó de un 18% histórico a casi 40%. En las últimas elecciones regionales, más del 50% de los venezolanos decidió no participar.

De este modo, en cuatro años se había desfigurado el modelo democrático venezolano, en otro tiempo orgullo de analistas y producto de exportación. A casi 40 años de democracia, la nación venezolana se ha convertido en una sociedad abstencionista y antipartidista, explosiva, rebelde e inflacionaria. ¿Cuántos de estos problemas se han resuelto? No es fácil responder esta pregunta. La conducta explosiva de 1989 parece haber devenido en conducta negociadora a través de la protesta. Los militares parecen reinsertarse en su papel institucional. La abstención electoral pudiera ceder si se logra una oferta electoral que atraiga a los venezolanos en función de sus más sentidas aspiraciones, El modelo económico estable, productivo y no inflacionario apenas se vislumbra entre la bruma de una modernización estancada.

La transición de un sistema centralizado a otro descentralizado ha abierto la posibilidad de nuevos desarrollos político-institucionales en el sistema democrático, pese a las dificultades y vicios que enfrentan los poderes regionales y locales. A ocho años de gobierno descentralizado, se ha logrado introducir tímidamente la esperanza de la eficiencia administrativa en el manejo

de los asuntos públicos y, sobre todo, siendo éste su más notable resultado, ha logrado abrir la brecha por donde se ha colado una nueva promoción de políticos, que han logrado reanimar políticamente al país.

En el marco del sistema político descentralizado, fuerzas y movimientos políticos surgidos en los años 70 adquirieron poder, y del mismo modo surgieron figuras con poca o ninguna presencia política previa. Hijos políticos de la descentralización, que hoy en día monopolizan las aspiraciones de cambio de más de la mitad de la ciudadanía, de acuerdo con diversos estudios de opinión. Sólo dos de ellos, Irene Sáez y Henrique Salas-Römer, alcanzan conjuntamente, según los últimos sondeos de opinión, casi el 60% de la intención de voto.

Este proceso de reconfiguración de la política venezolana se ha visto alimentado por la crisis de los partidos políticos más antiguos (AD y Copei). Por una parte, estimuló la aparición de terceros partidos como la Causa R y Convergencia sumados al Movimiento al Socialismo (MAS), tercer partido entre los años 70 y 80, los cuales lograron atraer a un electorado previamente bipartidista y llevar, por primera vez en la historia democrática, a la presidencia a un candidato no proveniente de las filas de AD y Copei.

Pero la crisis política también ha arrojado a los partidos emergentes. La Causa R y el MAS han sufrido profundas divisiones, que los han disminuido en su fuerza electoral y en su capacidad de convocatoria de un electorado escéptico y frustrado. Por otra parte, el debilitamiento de los partidos ha puesto en duda la posibilidad de cambio político a través de ellos, estimulando una «nueva» forma de hacer política centrada en figuras individuales, sin partido y algunas claramente antipartidistas, productos del «semillero» político de la descentralización y/o del fracaso de las intentonas militares de 1992. No hay que olvidar, sin embargo, que muchas de estas figuras como Irene Sáez y Salas Römer, iniciaron sus carreras políticas de la mano de AD y Copei y desearían seguir contando con ese apoyo para las elecciones presidenciales de 1998, con lo cual las posibilidades de cambio político pudieran reducirse o «congelarse» nuevamente, dado el peso de estos partidos en el manejo clientelar e ineficiente del Estado. Asimismo, la crisis de los partidos ha estimulado un nuevo asociacionismo político, aún en su infancia,

Se encuentra, pues, la democracia venezolana en medio de una transición difícil y confusa, desde 1989. Lenta y problemática. Entre un viejo modelo socio-institucional que no ha desaparecido, o mejor dicho sigue vigente, y uno nuevo que apenas asoma su rostro, lo cual nos envuelve en lo peor de ambos mundos. Así, el desafío democrático venezolano es lograr el cambio en medio de la crisis y el desorden, en medio de la confusión y la frustración ciudadanas, en medio de la pasividad y el alejamiento de la política de la mitad de la población adulta. La democracia se mueve entre la crisis y las posibilidades, entre fuertes dinámicas de deterioro y débiles procesos de desarrollo político-institucional.

En ese contexto, la característica principal de la democracia venezolana, hoy en día, es la pérdida de centralidad de sus más vigorosas herramientas de modernización: el petróleo, el Estado y los partidos. El petróleo como nervio financiero de la modernización, ya no es el financista universal de las actividades nacionales, dado que el aporte social por vía impositiva es cada día mayor y hasta superior al que tradicionalmente ha tenido el petróleo. Esto no significa que el petróleo haya perdido relevancia o que vaya a perderla en el futuro. Todo lo contrario. Es y seguirá siendo importante, pero en el marco de unas relaciones con la sociedad, crecientemente redefinidas.

Ello quiere decir que el petróleo ya no es la «madre distributiva» de la vida nacional: ahora se le extrae más al bolsillo de la sociedad. De esta forma estamos pasando de una democracia distributiva –es decir, que no le extraía recursos a nadie distinto de los recursos que el petróleo repartía– a una democracia extractiva, –que ahora no obtiene del petróleo la mitad de los recursos para financiar el funcionamiento de la sociedad y el Estado– pero que no alcanza aún el carácter de democracia redistributiva –la que obteniendo recursos de la sociedad los «devuelve» a la misma a través de bienes públicos.

El otro gran poder nacional que pierde centralidad es el Estado. El mismo ha estado envuelto en los últimos quince años, en una dinámica autoerosiva que lo tiene hoy en día en franca decadencia. El problema principal del Estado es resistencia al desarrollo de una institucionalidad regida por criterios impersonales y eficientes. La pérdida de fuerza financiera, su incompetencia burocrática y la corrupción, han llevado a una situación grotesca de un Estado sobrecargado de demandas, tanto por la vía constitucional como política, pero que no ha desarrollado las capacidades institucionales adecuadas para enfrentarlas. La razón principal de esta incapacitación del Estado reside en la conversión del Estado en un espacio de clientelas partidistas, de bajo nivel educativo, mal pagadas y con baja orientación técnica. El Estado se «hinchó» con personal partidista.

El tercer poder que hace crisis y pierde espacio en la inclinación política de la población, son los partidos políticos. Elemento decisivo en el manejo de los otros dos poderes –el petróleo y el Estado–, los partidos han sido los vehículos predominantes de movilización ciudadana y de articulación y agregación de intereses. Han sido a lo largo de la historia contemporánea los sujetos de la modernización, de la construcción del Estado, de la inversión de los recursos petroleros y los artífices del paradigma rentista. Hoy sufren una grave situación interna –entre la «amputación» y la división– que nos ha venido colocando en un escenario cercano a la desintegración de los partidos y con ella de la voluntad política nacional. Pero dicho escenario es al mismo tiempo el marco donde comienzan a prosperar otras posibilidades políticas. Para Venezuela, la formación de nuevos instrumentos políticos, de nuevos tipos de partidos y movimientos, es un imperativo de cara al futuro. Los venezolanos nos

encontramos en la prehistoria de una nueva era política caracterizada por la necesidad de reconstruir y/o construir un nuevo tipo de Estado que permita que haya más gobierno y capacidad para gobernar, pero la condición crítica de esa posibilidad es la aparición de nuevas promociones de líderes políticos y de nuevas estructuras partidistas. En ello, Venezuela no escapa a dinámicas similares que, hoy en día, vienen configurándose en América Latina.